

el Ambiental

Por un país productivo con **justicia social y ambiental**

ENTRE LA REACCIÓN CONSERVADORA Y LA PROFUNDIZACIÓN DE LOS CAMBIOS

El proyecto de país productivo con justicia social y ambiental está en la esquina opuesta al país de la desregulación y la timba financiera, que viene de la mano con el proyecto de restauración neoliberal impulsado por blancos y colorados.

A su manera, el contexto de Uruguay forma parte de la coyuntura regional latinoamericana, con fuerzas conservadoras y una derecha a la ofensiva intentando recuperar el terreno que ha perdido en los últimos años. Es una embestida restauradora que presenta variedad de matices: incluye desde las derechas golpistas hondureña y guatemalteca, separatista en Bolivia, hasta aquellas que apuestan a la institucionalidad electoral como en Chile y Uruguay. Y también debe incluirse a los gobiernos nítidamente de derecha que están apostando a crear situaciones de desestabilización regional, como el colombiano y el peruano.

Ante este abanico de posibilidades que componen la estrategia de la derecha continental, la opción de profundizar los cambios iniciando procesos de transformación reales -impulsada sobre todo por movimientos sociales y sectores populares- debe dejar de ser marginal para pasar a ser la arteria principal que impida los retrocesos en materia social, laboral y productiva.

Profundizar los cambios quiere decir -entre otras cosas- escuchar más a los movimientos sociales, y no contentarse con "abrir canales de participación", sino asegurar que esa participación resulte en práctica política concreta.

En este sentido, es necesario decir con claridad que en materia ambiental la gestión del actual gobierno no ha tenido un buen desempeño, pues los recursos estratégicos están gravemente amenazados por tendencias de extranjerización y concentración, además del amplio margen de acción y facilidades de las que gozan empresas transnacionales en sus proyectos de inversión.

Ante esto, no es bueno "comerse la pastilla" con relación a que los mecanismos de control existentes en la legislación uruguaya son los adecuados para enfrentarse a estas tendencias problemáticas: la DINAMA fue creada precisamente por el gobierno de Lacalle en 1990. Por algo será que desde el programa popular emanado del II Congreso del Pueblo se integró la propuesta de "modificar el funcionamiento de la DINAMA, revisando los mecanismos de evaluación de impacto ambiental y sustituyendo el carácter informativo de las Audiencias Públicas por instancias que cuenten con una imprescindible participación activa del pueblo organizado".

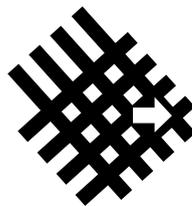
Sumario +

/// EDITORIAL: DESAGRAVIO A LUIS A. LACALLE

/// ENTREVISTA: REGULAR ES BUENO

/// TEJIENDO AMÉRICA

/// TOMÁ NOTA: COLOMBIA SANGRA, DUELE Y LUCHA



Publicación de:

REDES

Amigos de la Tierra Uruguay

San José 1423. 11200 Montevideo, Uruguay Tel/Fax: (598 2) 902 2355 / 908 2730
www.redes.org.uy | email: redes@redes.org.uy

Editorial

El candidato blanco es un buen espejo del Uruguay al que no queremos ni podemos volver

DESAGRAVIO A LUIS A. LACALLE

Se comete una injusticia hacia el candidato presidencial por el Partido Nacional, Luis A. Lacalle, si se le asigna en exclusiva la responsabilidad por "aterizar" las recetas neoliberales a nivel nacional durante su mandato. El gobierno que Lacalle condujo de 1990 a 1995 simplemente ahondó el cauce de aplicación del capitalismo en su esquema neoliberal, en una estricta continuidad con la política de la dictadura cívico-militar.

Existe una congruencia en los ejercicios al frente de la cartera económica de los rechazados Valentín Arismendi, Alejandro Végh Villegas, Ricardo Zerbino e Ignacio De Posadas. No obstante, cada uno de estos "actores" debió impulsar la política aperturista, privatizadora y concentradora de la riqueza en contextos sensiblemente distintos. De ahí sus aparentes matices. Pero sobre el final de esta nota el propio Lacalle confesará que sus sintonías hacia el régimen totalitario no refieren únicamente a la conducción económica.

INCOMPRESIÓN POPULAR

Pese a su romántica afección traumatológica, Lacalle conserva la capacidad de subirse y bajarse al podio de los "padres" del MERCOSUR según soplen los vientos. Cuando el bloque se esgrime como unión aduanera indiscriminada, uniformizadora de mercados consumidores, ahí está el candidato blanco para reclamar su papel en tan loable obra.

Pero cuando la alianza sureña intenta superar sus propios límites mercantilistas y transformarse en plataforma de superación de dependencia, aparece el ex presidente para denostar sus expresiones institucionales, de política transnacional, de movimiento social con una plataforma común, pues comunes son los problemas.

El MERCOSUR como lo concibió el Dr. Lacalle y sus pares de entonces (Carlos Méнем, Collor de Mello...) era una unión aduanera pensada en el Jardín de las Rosas de Washington bajo el formato "cuatro más uno". Y tenía su correlato en la reforma monetaria del entonces ministro de Economía, Ignacio De Posadas, que ancló el dólar e hizo muy conveniente la importación e inviable la exportación de bienes. Granjeros e industriales llevan marcadas las esquivas de esa etapa en la que la compra de autos cero kilómetro era la medida áurea del "desarrollo". La devaluación brasileña de 1999 puso "las cosas en su lugar" y arrojó a muchos compatriotas al desempleo, el desarraigo o el exilio.

El gran impulso a la forestación (luego de la Ley Forestal de 1987) que inició como estampida el proceso que hoy nos deja un millón de hectáreas de desierto verde, también es medalla del incomprensido Dr. Lacalle, que viene por la revancha. Con ese "incentivo", miles de productores familiares que aún se aferraban a la vida rural descubrieron que su lugar estaba en los cinturones de miseria de las ciudades y no en el terruño donde se hicieron mujeres y hombres.

Y en 1992 la incomprensión llegó al clímax: la denominada Ley de Empresas Públicas, que en rigor intentaba ahorrar tiempo al Parlamento en tren de la venta de "las joyas de la abuela", colocándolas todas en un mismo lote, recibí

el frondoso rechazo de la ciudadanía, que seguramente mal informada se negó mediante plebiscito a privatizarlas. Gigantes como BOTNIA o ENCE hoy cambian de dueño -y con ellas sendos pedazos del país- en negociaciones bursátiles. ¿Se imagina el lector algo similar para una OSE privatizada?, por poner solo un ejemplo.

Para continuar con los desagravios, le corresponde al Dr. Lacalle el haber enseñado -con una pedagogía digna de mejor causa- cuánto duelen las "razones de Estado" frente a una movilización popular. En agosto de 1994 el entonces ministro del Interior, Ángel María Gianola, planificó y ejecutó la represión más desafortunada y costosa en vidas humanas de la post dictadura. Desechando la larga tradición oriental en materia de asilo a perseguidos políticos, el gobierno de Lacalle extradió a sangre y fuego a cinco vascos al borde de la inanición por una cruenta huelga de hambre. Decenas de heridos de bala y dos personas muertas fue el saldo del operativo conocido como la "Masacre del Hospital Filtro".

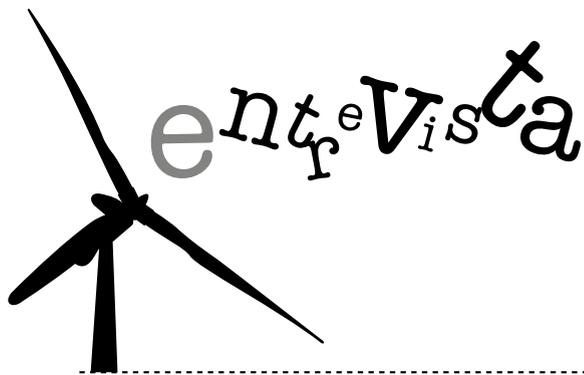
EL CAUDILLO Y EL DICTADOR

La medalla que colgó el gobierno español en la solapa de su par uruguayo por la extradición de los refugiados vascos tuvo para el vilipendiado Lacalle un sabor especial, a juzgar por la febril admiración que el nieto de Luis Alberto de Herrera confiesa tener por "El Caudillo" Francisco Franco.

En un escrito injustamente olvidado, "El Trasfoguero" (editado por Talleres Gráficos Donostia -1963- Pág. 26) Lacalle relata su encuentro con Franco en un pasaje que exime de mayores comentarios: *"Antes de conocer a Franco conocíamos ya un Jefe. El nuestro de ayer, de hoy, y de siempre. El caudillo de España era el segundo. Bastó que sus ojos claros miraran con profundidad para que lo comprendiéramos. Habló, más que habló, expuso. Cuarenta y cinco extraordinarios y maravillosos minutos. Ni una coma de lo dicho se ha borrado de la memoria. El tema: España. Occidente, la obra de veintitrés años, el futuro. Una mañana única en la vida. Por ello he querido que su recuerdo quedara grabado en estas páginas. Y porque al conocer a este hombre, le renovábamos la lealtad y la admiración de tres generaciones de gente de nuestra sangre".*

De modo que, bien mirada, la candidatura del Dr. Lacalle no es tan negativa si la entendemos como un buen espejo del Uruguay al que no queremos ni podemos volver.





REGULAR ES BUENO

SUNTMA pide políticas pesqueras del Estado para ejercer soberanía alimentaria

Afortunadamente, algunos sindicatos uruguayos han incorporado el concepto político de soberanía alimentaria a sus discursos. Tal es el caso del Sindicato Único de los Trabajadores del Mar y Afines (SUNTMA), que ha adoptado dicha propuesta -planteada originalmente por la Via Campesina en la Cumbre Mundial de la FAO de 1996- para reclamar mayor intervención estatal en las políticas pesqueras. La idea terminó de tomar cuerpo en 2008 con el II Congreso del Pueblo y el IX congreso del PIT-CNT.

Algunos datos que maneja el sindicato son preocupantes: debido al uso de redes de arrastre unas 140.000 toneladas anuales de pescado comestible -fundamentalmente juveniles que no alcanzan la talla comercial- son arrojadas al mar. "Por cada barco con pescado que llega a puerto se tiran dos al mar. El arrastre es depredatorio y afecta el ecosistema", denuncia el presidente del SUNTMA, José Franco.

El gremio apuesta a una explotación planificada de las riquezas acuíferas a través de propuestas concretas, como la conformación de un Ministerio de Intereses Marítimos, Fluviales y Portuarios; el desarrollo de una marina mercante nacional y una flota pesquera del Estado; la creación de un ente testigo para mejorar la accesibilidad de los productos, y políticas educativas que permitan incorporar, desde la niñez, el consumo de pescado como parte de nuestra dieta.



Además, los trabajadores hablan de desarrollo de la construcción naval, aprobación de una Ley de Pesca para preservar los recursos y consolidación de un mercado de acopio para la pesca artesanal.

"En Uruguay la flota pesquera está obsoleta. Son construcciones con 30 años y eso lo comprobaron la Universidad de la República y delegaciones europeas. La flota estatal va de la mano de una planificación de las políticas pesqueras, que incluya barcos multipropósito para evitar la zafra, y de un desarrollo de la construcción naval, complementando cadenas productivas con el MERCOSUR", argumenta Franco.

En cuanto al ente testigo, el sindicato plantea la creación de un órgano con competencias similares a la Industria Lobera y Pesquera del Estado (ILPE), desaparecida en 1986. Franco señaló que las políticas intervencionistas a través de este tipo de entidades son útiles para la regulación de precios,

y que "no fue casual" que la estrategia neoliberal las haya liquidado, ya que así facilitó el ingreso de las multinacionales al mercado.

"Una ama de casa en Uruguay paga por la merluza que exportamos hacia España hasta el triple de lo que paga una ama de casa española. Es una terrible contradicción", se queja el dirigente.

La dictadura militar definió, según Franco, que "la mejor política pesquera era que no hubiera política pesquera", y eso propició la concentración en oligopolios y monopolios, como el del Frigorífico Pesquero del Uruguay (Fripur).

De la mano de políticas públicas para regular capturas, industrialización y comercialización, el Estado debe promocionar los productos del mar. "El uruguayo no come pescado por los precios. Para garantizar la soberanía alimentaria es imprescindible que el pescado, que tiene alto valor proteínico, llegue a todos los hogares", reflexiona Franco.

Otros puntos que el SUNTMA ha puesto sobre la mesa son la exigencia para que haya 100 por ciento de tripulación uruguaya en los barcos de bandera nacional, la capacitación técnica a través de UTU o la Universidad de la República para los trabajadores del mar, y la separación del Ministerio de Defensa de las reglamentaciones y registros de marinos civiles (propone que pase de Prefectura al Ministerio de Trabajo, aunque sin aplicar "criterios oficinistas").

El sindicato demanda además la reformulación de la Hidrovía, el dragado y la canalización de vías marítimas con barcos de la Administración Nacional de Puertos, y que los barcos de bandera nacional tengan protagonismo en el transporte fluvial de combustibles (el país gasta 400 millones de dólares anuales en fletes de petróleo con banderas extranjeras). Algo similar sucede con las cifras millonarias destinadas al transporte de las exportaciones de carne, lana y cereales. "Parte de nuestros productos pueden ir en bodegas nacionales", dice Franco.

El año pasado el SUNTMA, que ha acusado al Ejecutivo por falta de voluntad política, salió al cruce de declaraciones del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ernesto Agazzi, quien opinó que el país no cuenta con la tripulación necesaria para una flota pesquera estatal.

En esa oportunidad, el sindicato habló de una desocupación superior al 30 por ciento como consecuencia de una ley de 1969 que habilita a los barcos de bandera nacional a llevar hasta un 50 por ciento de tripulación extranjera, y denunció que en la sede del SUNTMA se registraban por semana unos cien trabajadores en busca de empleo. Hoy tiene media sanción legislativa un proyecto que establece que la tripulación uruguaya debe representar el 90 por ciento en los barcos nacionales.

El gremio afirma que la ausencia de una planificación central habilitó procesos de extranjerización de las pesquerías, seguramente un poco embozados si se comparan con la industria frigorífica, aunque no menos preocupantes. Eso sucedió con la cotizada merluza negra y con las capturas de calamar, hace poco monopolizadas por empresas coreanas. Nueve barcos calamareros, cuatro congeladoras y un barco rayero coreanos abandonaron el país recientemente, por lo que la presencia extranjera ahora se reduce a empresas brasileñas dedicadas al mero y al pulpo, acota Franco.

LOS TAPA EL AGUA

Comunidades eclesíásticas de base brasileñas se reunieron a mediados de julio en la ciudad de Porto Velho, en el estado de Rondônia, para analizar, entre otros conflictos ambientales, la situación que se está viviendo por la construcción de las centrales hidroeléctricas Santo Antonio y Jirau en el río Madeira, en ese estado. En la actividad participaron decenas de delegados del Movimiento de Afectados por Represas de Brasil. El MAB (por su sigla en portugués) estima que la puesta en funcionamiento de las dos represas expulsará de sus hogares a unas 5.000 personas que viven en comunidades ribereñas, y dejará bajo agua unos 500 kilómetros cuadrados de tierra.

LA VIDA EN JUEGO

La región del Chocó en Colombia (zona Pacífico, una de las de mayor biodiversidad del planeta) sufre graves amenazas: el pasaje de un poliducto, el cultivo de la palma aceitera para agrocombustibles y el narcotráfico. Las comunidades indígenas, campesinas y afro de la zona son las que sufren en su propia piel las consecuencias del accionar de un Estado autoritario y represivo, que con el Ejército y los paramilitares asegura los negocios de Estados Unidos, las corporaciones transnacionales y la oligarquía colombiana. Así lo constató la Misión Internacional de Verificación sobre Agrocombustibles en Colombia, que recorrió varias zonas del país en la primera quincena de julio.



**tejiendo
américa**

SIMPATÍAS ESPERADAS

El canciller de facto hondureño, Carlos López, confirmó que sostuvo una reunión el 20 de julio con el presidente colombiano Álvaro Uribe. En entrevista cedida a la radio colombiana La FM, López aseguró que Uribe expresó "simpatía por el gobierno" golpista de Roberto Micheletti, que derrocó al de Manuel Zelaya el 28 de junio. Por su parte, el presidente constitucional hondureño ingresó el 24 de julio a su país vía terrestre, atravesando la frontera con Nicaragua acompañado de un "escudo popular". Finalmente Zelaya decidió retornar a Nicaragua ante la represión de la dictadura en varios puntos de Honduras.

Notas producidas en base a información de Radio Mundo Real (www.radiomundoreal.fm).



Notas de un viaje
al Paraíso reprimido

COLOMBIA SANGRA, DUELE Y LUCHA

Quince días recorriendo comunidades campesinas, indígenas y afro, círculos urbanos, estudiantiles y organizaciones sociales en Colombia, dejan un saldo de vivencias y reflexiones que no merecen la avaricia.

Los rostros, caminos, miradas, manos... y las decenas de pequeñas historias mínimas que los acompañan son por cierto intransferibles. Sin embargo, lo mínimo que corresponde a quien se sensibilice con la situación de iniquidad colombiana al palparla de cerca es expresarla, en este caso en algunas anotaciones.

En Colombia hoy se juega una batalla estratégica para toda América Latina. Este país con costas en dos océanos—potencial territorio para un nuevo canal bioceánico—, depositario de riquezas naturales casi infinitas, mega-diverso, este verdadero paraíso terrenal se asemeja sin embargo para los pueblos que lo habitan a un infierno, a una verdadera cárcel a cielo abierto. Y nos necesita.

En la primera quincena de julio participamos de una Misión Internacional de Verificación sobre Agrocombustibles en Colombia (1). Fuimos parte de la delegación que recorrió el valle geográfico del río Cauca, en la llanura más fértil de todo el territorio colombiano.

Allí, las mejores tierras ya no alimentan a colombianos de las ciudades, el pie de monte o la montaña, sino que surten de etanol a los automóviles de Estados Unidos y Europa.

En esas tierras se reprime brutalmente a campesinos, cortadores de caña y comunidades afrodescendientes, muchas de las cuales tienen su génesis precisamente en las legiones de esclavos que arrancaban el azúcar sobre el que se edificaría la riqueza de la élite colombiana, antes que el petróleo o los estupefacientes ganaran el espacio que hoy ocupan.

ABUSO GENÉTICO

La producción azucarera en el Valle del Cauca lleva en su ADN la ignominia y el abuso: primero el brutal esclavismo, luego, cuando en 1959 Cuba se arranca el vestido de prostíbulo norteamericano en el Caribe, Estados Unidos le regala el cupo azucarero a las familias terratenientes del Valle. No fueron pocos los especuladores del país norteamericano que sin un dólar se convirtieron en prósperos empresarios de ingenios, con el azúcar ya comprada a precios preferenciales aun antes de haber plantado la caña.

Nada ha cambiado. En 2005 las transnacionales norteamericanas “vuelven” al Valle para adosar a los ingenios azucareros las destilerías para producir etanol. Y estalla la superficie de caña, desplazando en su onda expansiva a miles de campesinos que subsistían en sus fincas. El auge de los agrocombustibles es paralelo al fracaso de Washington en Medio Oriente, pero sus métodos son del mismo cuño: ocupación, violencia, persecución sindical y miedo, que los aviones fumigadores esparcen junto al herbicida glifosato.

Si desde el aire el uniforme panorama de cultivo de caña es singular, a nivel del terreno es asfixiante. Más cuando, al ponerse el sol, comienza la quema de los cuadros cañeros que al día siguiente serán cortados. Una espesa ceniza cae sobre las poblaciones que allí habitan y la temperatura en esas quemadas alcanza los 700 °C. Cuando los corteros llegan al alba siguiente respiran los vapores del glifosato y se queman con la caña hirviendo.

En 2008, esos trabajadores dijeron “basta” y decidieron convocar a una audiencia pública para que Colombia despertara frente a su realidad. El Estado aplazó muchas veces el gran día, pero éste finalmente llegó unilateralmente el 14 de junio, y con él la decisión de los obreros de paralizar las plantas para obligar a las patronales a negociar algunas demandas mínimas relacionadas al control sobre el pesaje de la caña cortada y los altos precios de sus viviendas. Hoy los dirigentes de esa revuelta están judicializados y enfrentan cargos de sabotaje, daños personales y asociación para delinquir (!).

JAIME RESISTE

En el caserío “La Pailita” visitamos a Jaime. En 9/10 de hectárea, con sus frutales y canteros produciendo, sostiene a su madre viuda, a su esposa e hijo y a su hermana y sobrino. Pero el glifosato no conoce de excepciones y el que es aplicado como “madurante” de la caña, que se eleva a centímetros de los límites del “feudo” de Jaime, ha comenzado a quemar sus aguacates y guanábanas. No quiere vender sus tierras al ingenio: *“en la ciudad lo que toca es aguantar hambre... aquí en el campo decimos que si hay Yuca y plátano, sancocho se come”*.

Aferrado a esa verdad, Jaime puede resistir... y lo hace. Pero no todos corren esa suerte. Gabriel (60 años, la mirada líquida), a pesar de ser dirigente de una asociación de campesinos y obreros del sur de Bolívar, no puede ingresar a esa zona sin custodia armada e internacional. No es paranoia: su activismo en pos de organizar a los campesinos le significó un hijo muerto a manos de los paramilitares, maquinaria armada encargada de abrir paso a los cultivos de palma aceitera mediante el desplazamiento de comunidades.

Los hijos del mandatario colombiano Álvaro Uribe se cuentan entre los principales empresarios de palma aceitera del país. Ellos merecen vivir de la palma, los hijos de Gabriel merecen morir para abrirle paso.

Se trata de la expresión más descarnada de la nueva división internacional del trabajo que ha impuesto el capitalismo “verde”.

Pero los monocultivos en Colombia —de caña, palma, eucaliptos, pinos— no alcanzan a ocultar la realidad esencial: la existencia de un Estado autoritario que

en ancas de fuerzas armadas regulares (Ejército) y no (paramilitares), acalla a sangre y fuego toda voz disonante para facilitar el despojo.

Las comunidades campesinas colombianas y parte de la población nacional confían en que la presión sobre las élites y la solidaridad hacia las poblaciones, que provengan del extranjero, lograrán devolverle a su patria el carácter que le asignó la naturaleza: de verdadero paraíso. No los dejemos solos.

Ignacio Cirio



*Los hijos del mandatario Uribe
se encuentran entre los principales
empresarios de palma aceitera de Colombia.*

*Los hijos del presidente
merecen vivir de la palma.*

*los de Gabriel
merecen morir
para abrirle paso.*



Colombia julio 2009

NOTA
1. La cobertura periodística puede verse en www.radiomundoreal.fm